



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>

Vulneración al debido proceso en materia de acceso al expediente en el proceso ético disciplinario de la Ley 842 de 2003 que regula el ejercicio de la ingeniería en Colombia¹.

Violation of due process regarding access to the file in the disciplinary ethical process of Law 842 of 2003 that regulates the practice of Engineering in Colombia.

Anny Paola Pantoja Delgado²

Universidad Católica de Colombia

Resumen

Desde los tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos se fijó como principio orientador de todos los procesos judiciales y administrativos el debido proceso que fue recogido por la Constitución Política de 1991 en su artículo 29, donde describe los componentes que integran este principio y en consecuencia deben ser observados por todas las autoridades.

En ese orden de ideas es importante que exista un acceso al expediente sin ningún tipo de limitación ya que ello constituye una herramienta para ejercer una debida defensa. En ese sentido, controvertir las pruebas, es la posibilidad que tiene el procesado de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello sustentar la argumentación de su defensa.

Así, establecer limitaciones que no encuentran fundamento legal y constitucional establece una vulneración al derecho al debido proceso, en ese sentido y teniendo en cuenta que el artículo 56 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente. Dicha norma es el objeto de análisis dentro del presente artículo de reflexión que propone un estudio sobre la aplicación que la autoridad administrativa correspondiente realiza de éste.

Palabras Clave: Colombia, Debido proceso, Defensa técnica, Proceso Disciplinario, Supremacía Constitucional.

¹ Artículo de investigación presentado como requisito de grado para optar por el título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia, bajo la asesoría del doctor Elkin Mauricio Forero Arias, docente titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, 2021.

² Estudiante de Derecho con materias culminadas, identificado con código estudiantil No 2110805 y Correo electrónico: appantoja05@ucatolica.edu.co perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia.

Abstract

From the international human rights treaties and conventions, due process was established as the guiding principle of all judicial and administrative processes, which, said postulate was collected by the 1991 Political Constitution that describes in its article 29 the components that make up this principle and in Consequently they must be observed by all authorities.

In this vein, it is important that there is access to the file without any limitation since this constitutes a tool to exercise due defense. In this sense, to dispute the evidence is the possibility that the prosecution must pronounce on the value, content and internal and external elements of the collected material and based on this to support the argumentation of its defense.

Thus, establishing limitations that do not find legal and constitutional basis establishes a violation of the right to due process, in that sense and considering that Article 56 of Law 842 of 2003 is in force. This norm is the object of analysis within this reflection article proposes a study on the application that the corresponding administrative authority carries out of this.

Key Words: Colombia, Due Process, Technical Defense, Disciplinary Process, Constitutional Supremacy.

Sumario.

Introducción. 1. El debido proceso concebido desde el derecho internacional y el ordenamiento jurídico colombiano. 2. Acercamiento doctrinal y jurisprudencial al debido proceso en el marco de procesos disciplinarios en Colombia. 3. Vulneración al debido proceso disciplinario por la restricción al debido proceso señalada en la Ley 842 de 2003. Conclusiones. Referencias.

Introducción.

El artículo 56 de la Ley 842 de 2003 *“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”* es concretamente la norma en la cual se concentra el estudio propuesto. Este tema ha sido elegido en la medida que se relaciona con el principio del debido proceso, que es de rango constitucional y convencional, permite amparar derechos fundamentales y se aplica de manera general en los procesos judiciales y administrativos (Pérez y Rosales, 2019).

En consecuencia, se busca realizar un análisis de la forma en que la limitación impuesta en la norma anteriormente mencionada acerca del acceso al expediente en los procesos disciplinarios en el ámbito de la ingeniería puede vulnerar el principio del debido proceso. Adicionalmente se busca con este estudio evidenciar la manera en la cual los Consejos Profesionales de Ingeniería dan aplicación al presente artículo.

El tema presentado, se escoge en la medida que es un tema relevante que constituye el ejercicio de derechos fundamentales en un proceso ético disciplinario al cual puede verse enfrentado cualquier profesional. De igual manera, en la búsqueda de generar condiciones de seguridad jurídica para el desarrollo de procesos disciplinarios es necesario evaluar la aplicación de este artículo de manera integral.

Se considera además que realiza un aporte a la academia, porque esto se constituye en un ejercicio práctico de aplicación de los conocimientos adquiridos, pero además permite entregar un aporte importante a la sociedad en la medida que busca garantizar derechos fundamentales.

En razón de los argumentos expuestos se planteó como pregunta de investigación a desarrollar en el marco del presente artículo la siguiente: ¿Cómo los Consejos Profesionales de Ingeniería aplican el artículo 56 de la Ley 842 de 2003 que impone limitaciones en el acceso al expediente para el investigado en el marco de procesos disciplinarios? Este cuestionamiento tiene el objetivo principal de identificar la procedencia de la inaplicación de

una norma por parte de los Consejos Profesionales de Ingeniería en virtud de la excepción de inconstitucionalidad.

Metodología

La presente investigación se construye a partir de una metodología de tipo cualitativa que tiene como fuentes principales aquellas de tipo documental de tipo doctrinal y jurisprudencial, a partir de las cuales el autor construye un análisis con el que da respuesta a la pregunta de investigación (Agudelo, 2018).

Como lo indica Lecca (2014) en este caso concreto el estudio se centra en una reflexión propia del autor que se construye a través de la exploración de diversos argumentos estudiados en el desarrollo de éste, y busca estudiar a profundidad un fenómeno jurídico.

1. El debido proceso concebido desde el derecho internacional y el ordenamiento jurídico colombiano.

La importancia que ha cobrado la protección de los Derechos Humanos en razón a diversos hechos históricos ha generado como lo expone Ferrer (2011) la creación de herramientas que permiten crear un sistema común de valores universales, buscando que se reconozcan derechos intocables como la vida y la dignidad, y adicionalmente proporcionando un marco de referencia para construir un sistema de derechos humanos que está fundamentado en normas de orden internacional.

Respecto de esos sistemas mencionados anteriormente, Cubides, Castro y Barreto (2017) consideran que están establecidos regionalmente, en el caso específico del continente americano existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que busca la consolidación de los Derechos Humanos en el continente a través de la adhesión de los países a tratados y convenios que los lleve a comprometerse de manera formal a respetar los Derechos de los individuos.

Así mismo, en virtud de herramientas como el control de convencionalidad ha buscado que los Estados parte acojan los pronunciamientos dados en el Sistema Interamericano respecto

de la interpretación de la Convención Americana y las obligaciones de los Estados frente a los derechos que allí están contenidos (Martínez y Cubides, 2015), coincide en ello Agudelo et al (2017) al advertir que los jueces de los Estados parte deberán velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean afectadas o disminuidas por la aplicación de leyes que contravienen estas disposiciones, lo que las hace inaplicables.

Ahora bien, respecto del tema en concreto, tanto el sistema universal de Derechos Humanos como el sistema interamericano han sido enfáticos al afirmar que todas las personas que conforman una sociedad independientemente de la función que desarrollen dentro de un Estado son titulares de garantías judiciales, frente a cualquier tipo de proceso judicial y administrativo que se adelante en su contra. En esa medida, a continuación, se hará una evaluación del tratamiento del principio al debido proceso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH) y posteriormente se procederá a analizar la forma en la cual se concibe este en Colombia.

1.1 Las garantías judiciales y el debido proceso desde el SIDH:

Respecto de las garantías judiciales es importante mencionar que la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) recoge en su artículo 8 todo lo referente al derecho al debido proceso, limitando de esta manera las facultades en materia judicial y administrativa que tiene el Estado en el marco de los procesos que adelanta en contra de un ciudadano, este artículo de la CADH precisa diversos enunciados sobre garantías fundamentales que deben ser observados en el marco de procesos judiciales y administrativos.

En ese sentido, en primer lugar se menciona en este artículo 8 el derecho que tiene toda persona a ser escuchada con todas las garantías posibles, se advierte dentro de este primer inciso conceptos tan importantes como el de plazo razonable que hace referencia concretamente a que una persona no puede estar sometida a un proceso o investigación de manera indefinida, en consecuencia los ordenamientos jurídicos de los Estados parte de la convención deben fijar términos para las etapas procesales limitados en el tiempo y adicional considerar las figuras de prescripción y caducidad de la acción (Pastor, 2004).

En este mismo sentido, se advierte la necesidad de que el proceso sea adelantado por un juez competente de acuerdo con normas proferidas previamente en virtud del principio de legalidad. Pero además se señala la importancia de que dicho juez sea independiente e imparcial, lo que garantiza que existirá un juicio justo para el investigado o procesado.

Posteriormente, en el inciso segundo se menciona el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia hasta que se genere un fallo en firme en relación con una conducta y hechos que se le imputan al investigado.

Del mismo modo, como lo advierte Cortázar (2012) este inciso menciona una serie de garantías mínimas que deberán ser garantizadas al investigado para su garantía a la contradicción y defensa, se mencionan entre otros el derecho a un intérprete, a conocer la acusación, a nombrar un defensor, a la preparación de su defensa, y de igual modo se advierte que sobre el derecho a no auto incriminarse, además se menciona la posibilidad que tendrá el investigado a recurrir la decisión de primera instancia.

Por otra parte, el tercer inciso de este artículo sobre garantías judiciales hace referencia a la confesión como medio de prueba, y circunscribe la validez de esta únicamente a aquellas que se realizan de manera libre, sin ningún tipo de coacción por parte de las autoridades. Al respecto Díaz (2016) precisa que este punto busca concretamente la inadmisibilidad de aquellas pruebas obtenidas mediante coacción o hechos de tortura, concretamente aquellas confesiones forzadas.

Finalmente, se hace mención del principio de “*non bis in idem*” o prohibición de doble juzgamiento por unos mismos hechos, Dulitzky (2017) advierte la importancia de esta prohibición en la medida que se cierra la posibilidad de que una persona sea sometida a un nuevo juzgamiento cuando ya en un juicio ha sido exonerado de los cargos por los cuales se le acusaba.

Ahora bien, realizada la exposición anterior sobre el contenido de las garantías judiciales dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, es procedente a continuación determinar la forma en la cual a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) se han interpretado estas disposiciones.

Respecto del tema de garantías judiciales, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha ampliado en diversas ocasiones el tema de garantías judiciales, explicando el alcance de cada una de las disposiciones contenidas en el artículo 8 de garantías judiciales.

Por ejemplo, sobre del derecho que tiene toda persona a ser escuchada con las garantías mínimas, la Corte IDH dentro del Caso *Dacosta Cadogan Vs. Barbados* (2009) se menciona la importancia del rol del juez en los procesos judiciales y administrativos ya que, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso, este es quien deberá definir cuáles son esas garantías mínimas. Como lo señala Blanco (2012) se describe expresamente en esta sentencia que es obligación del juez el asegurar que el proceso cumpla con el respeto a esas garantías mínimas en el marco de un debido proceso.

De igual manera, en el Caso *Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay* (2011) enfatiza en que las garantías judiciales no son un tema exclusivo de los procesos judiciales, por el contrario, se afirma que todos los procedimientos que realicen las entidades públicas donde se tomen decisiones sobre los derechos de un individuo deben observar éstas:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2011, p.59)

En ese sentido, es claro que deben existir procedimientos reglados que garanticen la observancia de las garantías de las personas que se encuentren dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza en el cual se esté discutiendo un derecho, así mismo esta persona deberá tener la posibilidad de aportar pruebas, y las mismas deberán valorarse para tomar la decisión.

Ahora bien, respecto del plazo razonable advierte Cubides, Castro y Barreto (2017) el ser juzgado en un plazo razonable es un contenido implícito del debido proceso, esto busca impedir que las personas que se encuentren acusadas o imputadas en algún proceso judicial

o administrativo no permanezcan indefinidamente sin que se defina su situación, con esto se busca que los procedimientos tengan tiempos limitados.

En la jurisprudencia de la Corte IDH sobre el plazo razonable se han hecho varios pronunciamientos, en el Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua (1997) esta corporación para definir este concepto trae a colación los elementos mencionados en fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos que ha hecho referencia a que debe determinarse la razonabilidad del plazo de un proceso judicial o administrativo teniendo en cuenta, la complejidad del asunto, la actividad procesal que se genera por parte del investigado y la forma en la cual actúan las autoridades judiciales o administrativas.

De igual modo, en el Caso Vásquez Durand y Otros Vs. Ecuador (2017) la Corte IDH hace referencia a la necesidad de que se definan las situaciones o hechos que se están investigando en términos razonables:

La Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan en tiempo razonable. Este Tribunal ha señalado que el “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva. Asimismo, ha considerado que una demora prolongada constituye en principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales (p.53).

Ahora bien, en el marco de procesos disciplinarios esta corporación ha señalado que, si bien reconoce la potestad disciplinaria sancionadora del Estado frente a sus servidores públicos, también advierte que dichos procesos deben estar revestidos de todas las garantías mencionadas en la CADH. Como lo advierte Bardia (2019) los procesos de tipo disciplinario deben garantizar que exista en el desarrollo de los mismos competencia, independencia e imparcialidad y además sus procedimientos deben estar previamente reglados.

La Corte IDH también ha hecho referencia a la obligación que tienen los Estados parte de prever todas las garantías judiciales mencionadas dentro de la Convención a los procesos judiciales y administrativos, ya que dichas garantías no se predicen de manera exclusiva para los procesos penales:

La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, p.93).

Ahora bien, frente a las sanciones que se derivan de este tipo de procesos, es importante mencionar que esta misma corporación ha precisado que hay algunos derechos que no son absolutos y en desarrollo a esa precisión ha expuesto los elementos y requisitos para regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención.

En ese sentido debe evaluarse si en primer lugar dicha restricción tiene una finalidad legítima, y la misma resulta necesaria dentro de una sociedad democrática, y en ese sentido se debe ponderar si no existe una mejor forma de lograr dicha finalidad (Orozco, 2019). Ahora bien, precisamente a continuación se entrarán a analizar las sanciones de destitución e inhabilidad impuestas a los servidores públicos, producto de procesos disciplinarios, a fin de evaluar las garantías que sobre el tema ha advertido la Corte IDH y su aplicación en Colombia.

2. Acercamiento doctrinal y jurisprudencial al debido proceso en el marco de procesos disciplinarios en Colombia.

En el ordenamiento jurídico colombiano desde la Constitución Política de 1991 se consagró en el artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe observarse en todos los procesos de tipo judicial o administrativo, de igual manera se mencionaron los elementos que integran ese derecho (Bernal y Castro, 2015).

En el ámbito del derecho disciplinario, el debido proceso tiene plena aplicación en la medida que al estar frente al ejercicio sancionador del Estado deben respetarse de manera plena los principios, valores y reglas previstas en la Constitución, así como garantizar de manera plena el ejercicio de los derechos fundamentales de quienes se vean vinculados a este tipo de procesos.

Como lo advierte Prieto (2003) el debido proceso se compone de una serie de garantías que se mencionan de manera sucinta en este artículo y se desarrollan de manera posterior en las normas que rigen cada procedimiento y en la jurisprudencia de la rama judicial, quien hace análisis amplios sobre cada una de esas garantías en escenarios específicos.

En esa medida, el debido proceso de la Constitución Política de 1991 en el inciso primero se hace referencia al principio de legalidad que como lo advierte Troncoso (2015) hace referencia a que las personas deben juzgarse conforme a las leyes ya proferidas para el caso concreto, y en todo caso deberá hacerlo la autoridad que tenga la competencia para ello.

Sobre el principio de legalidad, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

En lo que se refiere al principio de legalidad, la Corte ha señalado que su carácter imperativo en materia disciplinaria, deviene de la aplicación de varias disposiciones constitucionales, y en virtud de dicho principio, las autoridades administrativas sólo pueden imponer sanciones en aplicación de normas preexistentes, en las que se consagran claramente las conductas que constituyen falta disciplinaria, así como las sanciones que se derivan como consecuencia. Contrario sensu, en la imposición de sanciones, la autoridad respectiva no puede aplicar normas en forma retroactiva, salvo la garantía del principio de favorabilidad, que debe ser analizado en cada caso concreto (Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2008).

Es claro entonces que podrán juzgarse a los individuos únicamente a partir de las leyes preexistentes al momento de cometer el hecho o la conducta que se está reprochando. Esto es esencial en la medida que restringe el poder público a la vigencia de la norma en el ámbito del derecho sancionador.

La segunda parte de este artículo 29 hace referencia al principio de favorabilidad que hace referencia a la aplicación de la ley más favorable cuando exista algún tipo de duda sobre la aplicación de una u otra norma por temas de vigencia, así esta se haya proferido de manera posterior al acaecimiento de los hechos. Frente a este principio, Tejada (2016) indica que en el ámbito disciplinario este principio se aplica conforme a la materia que regula cada norma, ya que se deberá evaluar en cada situación particular.

Posteriormente, en el inciso cuarto se hace referencia a la presunción de inocencia hasta que no exista un fallo condenatorio en firme. En este mismo apartado, se señala la importancia del derecho a la defensa, que la Corte Constitucional ha definido de la siguiente manera:

La jurisprudencia constitucional define el derecho a la defensa como la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga” (Corte Constitucional, 2017).

Como se observa el derecho a la defensa se compone de varios elementos, que esencialmente permiten a la persona vinculada a un proceso disciplinario realizar actuaciones dirigidas a demostrar su inocencia, en ese sentido, debe tener acceso a las pruebas obrantes en el proceso para de esta manera contar con la posibilidad de controvertirlas.

Es importante finalizar este apartado señalando que las disposiciones mencionadas en el marco de procesos disciplinarios como el que regula la Ley 842 de 2003 son indispensables en la medida que este tipo de proceso está enmarcado en el ejercicio de la facultad sancionadora que tiene el Estado, y en esa medida deben observarse todos los componentes del debido proceso que se han evaluado hasta el momento en el derecho interno y en el ámbito internacional.

3. Vulneración al debido proceso disciplinario por la restricción al debido proceso señalada en la Ley 842 de 2003.

El Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, refiere que toda persona es libre de escoger su profesión (COPNIA, 2020), sin embargo, también señala que el legislador tendrá la potestad de inspección y vigilar el ejercicio de las profesiones que considere implica un riesgo social.

En ese sentido, por creación legal se crea el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA quien tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de 1214 profesiones (COPNIA, 2020) y como lo indica Maldonado (2020) ejerce estas funciones a través de

procesos de inspección a personas jurídicas y adicionalmente adelanta procesos ético disciplinarios.

Posteriormente, mediante el Título III “Del consejo profesional nacional de ingeniería y sus correspondientes regionales o seccionales” de la Ley 842 de 2003, se desarrolla todo el marco normativo que rige dicha entidad y desarrolla en general el procedimiento disciplinario que se sigue contra los profesionales en carreras profesionales específicas.

Cabe expresar que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-964 de 1991 estableció que el legislador puede crear una reglamentación específica para determinadas profesiones, y es así como la ingeniería está regulada por la Ley 842 de 2003 (y otras disposiciones), además adopta el Código de Ética Profesional.

En el marco de lo anterior, el Consejo Profesional de Ingeniería expresa lo siguiente:

El proceso ético disciplinario profesional se origina en el control disciplinario que debe ejercer el Estado sobre los profesionales a los que les ha otorgado autorización legal para el ejercicio de una profesión riesgosa, en ese sentido dicho control disciplinario surge de la obligación del Estado de proteger a la sociedad del riesgo que por la mala práctica se pueda generar. Así las cosas, la causa, en el caso del proceso disciplinario ético profesional es la mala práctica de la profesión, que dinamiza el riesgo (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 2008).

De igual forma, en el Capítulo II que hace referencia al Procedimiento disciplinario del Título V de la Ley 842 de 2003, se explica que la competencia para adelantar los procesos la tienen los Consejos seccionales (artículo 28) cuya integración se encuentra reglada por la misma norma (COPNIA, 2020).

Acerca de las etapas que tiene reglamentado este proceso dentro de la Ley 842 de 2003, la figura que se muestra a continuación logra evidenciar con claridad las mismas:

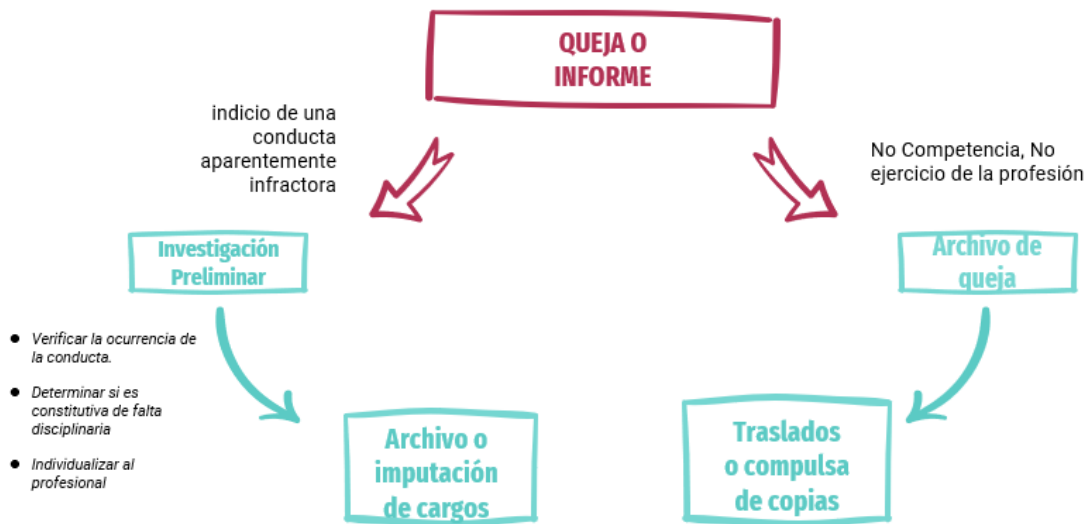


Figura 1. Etapas proceso ético disciplinario Ley 842 de 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia dentro de la gráfica el proceso inicia mediante una queja o informe de servidor público que se traslada al Consejo Profesional para su estudio, posterior a éste se decidirá si existe mérito para abrir una investigación preliminar que tendrá como fines específicos verificar los hechos, individualizar al profesional que los cometió, y determinar si la conducta infringe el Código de Ética.

Para dejar claridad acerca de la duración temporal de estas etapas procesales, se muestra la figura 2 a continuación, que evidencia los términos previstos por el legislador para este tipo de actuaciones:

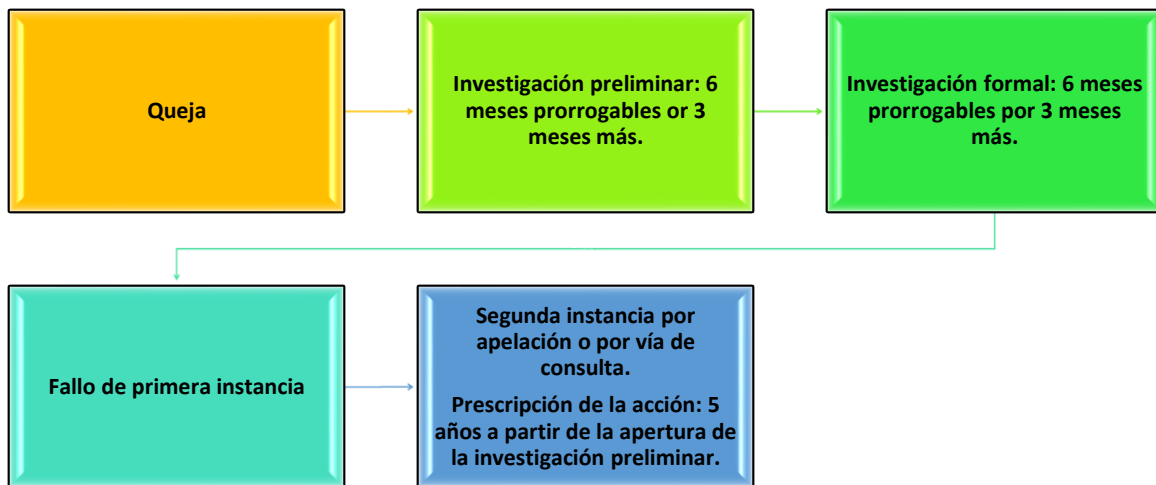


Figura 2. Límites temporales del proceso ético disciplinario Ley 842 de 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar la investigación preliminar tiene un término de 6 meses que podrán prorrogarse por 3 adicionales, siendo en total 9 meses los previstos para esta etapa. Una vez finalizado el término previsto para la investigación preliminar, se debe decidir en la secretaría seccional si existen los elementos de juicio suficientes para imputar cargos al profesional, con lo cual se iniciará la investigación formal cuya duración es de 6 meses que pueden prorrogarse por 3 adicionales.

En todo caso es preciso advertir que desde la apertura de investigación preliminar hasta el fallo de segunda instancia no puede excederse el término de 5 años, considerando que la prescripción de la acción se menciona por parte del legislador en este periodo.

Ahora bien, frente a las particularidades del proceso, se observa desde el Artículo 56 de la Ley 842 de 2003, que establece las condiciones sobre el acceso al expediente lo siguiente:

- **ARTÍCULO 56. ACCESO AL EXPEDIENTE.** El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario, solo a partir del momento en que

sea escuchado en versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.

De lo expresado en dicho artículo se advierte que se está condicionando el acceso al expediente al investigado, sin que ello constituya una limitación válida ya que la versión libre y espontánea constituye una diligencia voluntaria para el investigado, y los cargos únicamente se formulan posterior a una investigación preliminar, lo anterior permite inferir que únicamente el investigado podría conocer la queja y el expediente en una etapa procesal ya avanzada.

Sin embargo, se observa que se ha inaplicado esta disposición ya que las directrices emanadas de la subdirección jurídica de la entidad COPNIA señala concretamente que como sujeto procesal el investigado o su defensor está presente en todo el proceso disciplinario, desde la etapa preliminar y en lo sucesivo y menciona expresamente que:

(...) “tiene la potestad de solicitar pruebas, controvertir las decisiones que no le sean favorables, interponiendo recursos ordinarios y extraordinarios, previstos por la ley; acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la legalidad de la actuación cumplida y del fallo emitido, cuando fuere el caso” (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 2017).

Es claro en el marco de lo anterior, que en este caso se hace una inaplicación de esta disposición que restringe el acceso al expediente vulnerando el derecho a la defensa y contradicción del investigado, identificando por parte de la autoridad administrativa que dicha disposición es contraria a la Constitución Política de 1991.

Conclusiones

Para responder a la pregunta de investigación debe señalarse que la versión libre y espontánea hace relación a la exposición de los hechos de la manera en los cuales los percibe el investigado, como su nombre lo indica, sin juramento, que hace el disciplinado sobre lo que le consta de los hechos objeto de la investigación, razón por la cual es de gran importancia que éste tenga pleno conocimiento del expediente disciplinario con el fin de pronunciarse sobre los hechos que allí se relacionan y que sustentan la acusación o queja.

De esta manera, hay una flagrante violación al debido proceso cuando al investigado se le prohíbe el acceso al expediente previo a rendir su versión libre, por cuanto se le puede llegar a perjudicar en su derecho de defensa, toda vez que éste, al no conocer exactamente ni los cargos que se le imputan ni el contenido de la información que reposa en el expediente, su versión pueden conllevar a sentar una situación que no sea de conveniencia para sí mismo, conllevando a que se dificulte su defensa.

El debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución política, como un derecho fundamental, el cual comprende que el sindicado pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, siendo garante de este principio que, con la versión libre sobre las circunstancias de su comisión, en el curso de esta pueda aportar y solicitar pruebas en ejercicio de los principios de contradicción y valoración.

Por ello, para evitar dicha vulneración, se realiza por parte de la autoridad administrativa una excepción de inconstitucionalidad frente a la aplicación de este artículo, un control por vía de excepción. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o administrativo por parte de la autoridad que procede a inaplicar la norma de inferior jerarquía y que contraria la Constitución Política, que es la norma superior.

Lo anterior, ya que es evidente que las restricciones que impone el artículo 56 frente al acceso al expediente en materia disciplinaria contraviene lo dispuesto sobre el derecho fundamental al debido proceso. Ya que es claro que la forma más eficaz es mediante el conocimiento que el disciplinado tenga del expediente, con lo anterior en su versión libre podrá hacer un ejercicio concreto de contradicción sobre aquellas pruebas que obren dentro del proceso, y más importante aún aportara aquellas que puedan ser favorables para quien se encuentra vinculado como un investigado en un proceso de esta naturaleza.

Debe dejarse claro en este punto que si bien la versión libre como tal en un proceso ético disciplinario como el contemplado en la Ley 842 de 2003 no se considera un medio de prueba en sí mismo, si es por su naturaleza un mecanismo para que el investigado pueda ilustrar al tribunal ético sobre su percepción de los hechos y desvirtuar la denuncia realizada en contra

de este, es por ello que es esencial que se garantice el acceso al expedientes desde la notificación de este tanto para el investigado como para su defensa.

Referencias

Agudelo-Giraldo, Ó. A., Castro-Buitrago, C. E., Cubides-Cárdenas, J., Reyes-García, D. I., León-Molina, J. E., Torres-Ávila, J. & Woolcott-Oyague, O. (2017). Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana. Bogotá: Universidad Católica de Colombia

Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación (pp. 17-44). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Bardia, A. B. (2019). Destitución magistrados. Garantías judiciales. Corte IDH, Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2019. Serie C No. 373. Revista Debates sobre Derechos Humanos, (3), 191-202.

Barón, M. (2011). Las garantías fundamentales frente al proceso disciplinario en Colombia. Derecho y Realidad, 9(18).

Blanco, C. (2012). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Editorial Universidad del Rosario.

Bernal-Castro, C. A. & Moya-Vargas, M. F. (2015). Democracia y proceso penal Debido proceso y publicidad. En C. A. Bernal-Castro & M. F. Moya-Vargas. Libertad de expresión y proceso penal (pp. 59-99). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

COPNIA. (2020). Procedimiento del proceso ético profesional. Documento oficial. Recuperado de https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/etico-profesional/Proceso_etico_profesional.pdf

Cortázar, M. G. (2012). Las Garantías Judiciales. Análisis a partir de los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Prolegómenos. Derechos y Valores*, 15(30), 65-79.

Cubides Cárdenas, J., Castro Buitrago, C. E., & Barreto Cifuentes, P. A. (2017). El plazo razonable a la luz de los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En J. Cubides Cárdenas, P. A. Barreto Cifuentes, C. E. Castro Buitrago, J. Castro Ortiz, N. Chacón Triana, C. P. Garay Acevedo, A. J. Martínez Lazcano, S. Montoya Ruiz & C. Rodríguez Bejarano. *Desafíos contemporáneos de la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano* (pp. 13-30). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Díaz, Á. (2016). La prueba obtenida mediante coacción y su inadmisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista de derecho (Valdivia)*, 29(2), 229-252.

Dulitzky, A. (2017). *Derechos humanos en Latinoamérica y el Sistema Interamericano. Modelos para (des) armar*. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.

Ferrer, E. (2011). Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad: El nuevo paradigma para el juez mexicano. *Estudios constitucionales*, 9(2), 531-622. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v9n2/art14.pdf>

Gómez Pavajeau, C. A. (2011). El Derecho Disciplinario en Colombia: 'Estado Del Arte'(Disciplinary Law in Colombia: State of the Art). *Derecho Penal y Criminología*, 32(92).

Isaza Cardozo, G. D. (2020). Potestad disciplinaria y derecho a elegir: un examen de la destitución de servidores públicos de elección popular en Colombia. *Rev. Digital de Derecho Admin.*, 23, 289.

Lecca, F. C. (2014). La investigación jurídica. *Docentia et Investigatio*, 16(1), 173-186.

Maldonado, G. A. (2020). El derecho disciplinario ético-profesional y su lugar en el ordenamiento jurídico colombiano. *DIXI*, 22(2), 1-44.

Martínez-Lazcano, A. J. & Cubides-Cárdenas, J. (2015). Influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Control de Convencionalidad (CC): análisis de

dos casos paradigmáticos. En N. M. Chacón-Triana, T. G. Vivas-Barrera, J. Cubides-Cárdenas, A. J. Martínez-Lazcano & D. R. Vargas-Díaz. Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (pp. 95-122). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Orozco, V. (2019). La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso de Costa Rica/The Execution of Judgments of the Inter-American Court of Human Rights: The Case of Costa Rica. *República y Derecho*, 4(4), 1-33.

Pastor, D. R. (2004). Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal. *Revista de Estudios de la Justicia*, (4), 51-76.

Pérez, E. S., & Rosales, C. M. (2019). La experiencia del debido proceso en la jurisdicción colombiana. *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata*, (49), 007-007.

Prieto Monroy, C. A. (2003). El proceso y el debido proceso Vniversitas, núm. 106, diciembre, 2003, pp. 811-823 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. Vniversitas, (106), 811-823.

Tejada Correa, J. G. (2016). Debido proceso y procedimiento disciplinario laboral. *Opinión Jurídica*, 15(30).